

ECONOMÍA / POLÍTICA

Díaz asusta e irrita al pequeño comercio con su plan de bajar precios en los súper

“TORPEDO A LAS EMPRESAS” / Las patronales del comercio de proximidad advierten de que perderán una “cuota de mercado descomunal” si sale adelante la propuesta de la vicepresidenta de topar los precios hasta después de la Navidad.

J. Díaz / C. Polanco, Madrid
D. Casals, Barcelona

Con su irrupción en el sector alimentario y su determinación a pactar con los grandes grupos de distribución la congelación de precios de una cesta básica de alimentos, Yolanda Díaz no solo ha invadido las competencias de otros ministerios, con Agricultura a la cabeza, pisando callos entre sus compañeros socialistas de Gobierno, sino que también ha provocado, a partes iguales, indignación y temor entre el pequeño comercio. “Es un torpedo en la línea de flotación del pequeño comercio”, aseguró ayer a EXPANSIÓN el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Rafael Torres, quien explicó que si esa iniciativa sale adelante “ejercería un efecto llamada para que la gente vaya a comprar a las grandes cadenas y deje de ir al comercio de proximidad”, lo que hundiría a los pequeños establecimientos.

Díaz aseguró ayer que no pedirá al pequeño comercio el mismo esfuerzo que al grande. De hecho, el lunes se reunirá con las patronales Anged, Aces y Asedas, todas ellas asociaciones de grandes distribuidoras alimentarias, pero dista mucho de ser una buena noticia para los pequeños comerciantes. “Si eso se pone en marcha, se va a cargar al pequeño comercio, que no puede competir con eso, porque no puede asumir esos costes ni esa reducción de márgenes”, advirtió Torres, quien añadió que perderían “una cuota de mercado descomunal”. Eso se traduciría a su vez en la pérdida de empresas y de empleo, por lo que “esto es inviable, no se puede permitir”, afirmó el presidente de la CEC, que representa a cerca de 500.000 comercios de toda España que emplean a 1,8 millones de trabajadores.

En términos similares se expresó Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de los Trabajadores Autónomos (ATA), al afirmar que “daña al pequeño comercio, que no tiene la misma capacidad de competir. Siempre se señala al tendero, al frutero y al pescadero”.

Ayer, Díaz ya tuvo un pri-



El director ejecutivo de Carrefour, Alexandre de Palmas, con los ministros de Consumo, Alberto Garzón, y de Trabajo, Yolanda Díaz, ayer, durante su reunión.

mer encuentro. Fue con representantes de Carrefour, acompañada del ministro de Consumo, Alberto Garzón, Díaz desveló más detalles del plan de topar precios de productos básicos de la cesta de la compra, rebajando a la vez su tono inicial. Se trataría de un acuerdo entre las grandes distribuidoras alimentarias, para

que, a costa de “sus márgenes empresariales”, ofrezcan una cesta de la compra “asequible y de calidad”, un esfuerzo empresarial que habría de extenderse más allá de navidades. “Les hemos pedido que esa cesta tenga algunas características: variedad y que incorpore productos frescos y proteínas, pescado, carne, hue-

vos, fruta y hortalizas, garantizando que sea de calidad y que vaya rotando cada semana”. Todos los productos mencionados por Díaz han registrado un alza de precio por encima del 11% en el último año. Desde la CEC insisten en que medidas de este tipo, “cortoplacistas”, son “cosméticas”, y abogan por pro-

puestas a medio y largo plazo para atajar el problema.

Los apoyos dentro del seno del Gobierno a la propuesta de Díaz son escasos y se circunscriben sólo a los ministros de Unidas Podemos, como demuestra la presencia ayer de Garzón o las palabras de aliento de Ione Belarra. Mientras, los titulares de car-

Díaz pide un acuerdo entre empresas para topar precios a costa de sus márgenes de beneficios

tera socialistas continúan ampliando sus críticas. Margarita Robles, ministra de Defensa, acusó a la vicepresidenta segunda de inmiscuirse en unas competencias totalmente ajenas a su cartera, al “entrar en algo que no le corresponde”. Preguntada directamente sobre estas declaraciones, Díaz contestó que “el bolsillo de los españoles compete a todo el gobierno de España”. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se alineó también con las patronales. “Uno puede pactar con las grandes cadenas de alimentación o distribución, pero eso puede ir en perjuicio del pequeño comercio”, afirmó.

Inquietud en Cataluña

En Cataluña, los *botiguers* también se muestran muy preocupados. “Nuestra capacidad de compra es menor, los grandes operadores distorsionan el mercado y no podremos ofrecer productos al mismo precio; estamos haciendo un gran esfuerzo para no repercutir el alza de los costes al consumidor”, asegura Pròsper Puig, vicepresidente de Barcelona Comerç, entidad que aglutina a los ejes comerciales de la capital catalana. “Está lloviendo sobre mojado; llevamos ya dos años y medio muy difíciles”, asegura Puig. “El comercio depende de la renta disponible de las familias: a la inflación se suma también las consecuencias de la subida de los tipos de interés”, concluye.

La inquietud se extiende a Comertia, asociación que engloba a grupos de distribución y restauración catalanes de capital familiar. Según su presidente, David Sánchez, la rebaja del precio de la cesta de la compra es “una medida muy difícil de aplicar”. “Estamos hablando de un sector con mucha diversidad de productos, con calidades y precios muy diferentes, donde las tarifas vienen marcadas desde origen”, apostilla.

CEIM: “Ineficaz y dañino para el pequeño comercio”

Hay amores que matan o que, al menos, pueden provocar un gran daño. Yolanda Díaz ha puesto el foco en las grandes cadenas de distribución y ha dejado al pequeño comercio al margen de su cesta de alimentos a precios congelados. Lo ha hecho con el argumento de que no le pedirá ese esfuerzo porque “no tiene capacidad” para limitar los precios del mismo modo en que pueden hacerlo los grandes grupos. Y es cierto. Por eso, la posibilidad de que la gran distribución acuerde una cesta de la compra barata, con “precios limitados o congelados” y que dure más allá de las festividades navideñas, es una pésima noticia para el pequeño comercio, que, tal como advierten las

patronales del sector, pueden ver sus establecimientos vacíos ante el efecto llamada hacia las grandes superficies que una medida de estas características puede provocar. “Acordar un precio entre las principales empresas de distribución es ilegal, ineficaz y dañino para el pequeño comercio”, afirma en declaraciones a este diario Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM. En su opinión, “la vicepresidenta demuestra un enorme desconocimiento de la realidad económica y propone un acuerdo que atenta contra las normas de competencia, que implicaría escasez de productos y que dejaría indefensos a los pequeños comerciantes para

competir con aquellos que podrían vender a pérdidas si pudieran saltarse la ley que ahora se lo impide”. Para Garrido, esto es “un cúmulo de disparates”. Entre las voces que en los últimos días se han manifestado contra la posibilidad de topar el precio de los alimentos básicos figura la del propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien el jueves la rechazó de plano. “No podemos compartir la intervención de precios; esto empieza a parecerse más a una programación soviética”, señaló el presidente de la patronal, quien advirtió de que si se pretende regular “absolutamente todo”, lo que se acaba teniendo es “una economía intervenida, un Estado intervenido y falta de libertad”.